



Con fecha 31 de julio de 2023 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia de este Ministerio solicitud de acceso a la información pública formulada por [redacted] al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La solicitud quedó registrada con el número 00001-00081505.

El 28 de agosto de 2023, fecha a partir de la cual comienza a contar el plazo de un mes para su resolución previsto en el art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se recibió esta solicitud en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que es el órgano competente para resolver.

El texto de la solicitud de información es el siguiente:

Solicito el informe de la Abogacía del Estado sobre el proyecto de Real Decreto, de xx de xxxx de 2023, que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de la propuesta de reglamento del parlamento europeo y del consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.

Dicho informe se menciona en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo de dicho proyecto de Real Decreto en la página 5.

Una vez analizada la solicitud núm. 00001-00081505, esta Secretaría de Estado

RESUELVE

Denegar el acceso de [redacted] conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1.k) de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual el derecho de acceso podrá ser limitado cuando el acceso a la información pueda perjudicar la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.

Concretamente, el proyecto de Real Decreto para el que se solicita un elemento que forma parte del expediente, como es el informe preceptivo de la Abogacía del Estado, se encuentra aún en fase de aprobación, no habiendo por tanto culminado su tramitación. Por lo tanto, el hecho de hacer público un elemento que sin duda va a tener una relevancia crucial en el proceso de toma de decisiones de cara a su aprobación definitiva podría interferir y perjudicar dicho proceso.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Firmado electrónicamente

La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial